

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

AUTO INTERLOCUTORIO No 12

Auto mediante el cual se declaran improcedentes solicitudes de pérdida de competencia y fijación fecha de audiencia

Proceso : Ordinario Laboral
Radicado : 05001 31 05 011 2019 00322 01
Demandante : AURA ROSA PATIÑO AVENDAÑO
Demandado : COLPENSIONES

En el proceso ordinario laboral de la referencia, solicita el apoderado de la demandante se fije fecha de audiencia o se declare pérdida de la competencia para continuar con el trámite del proceso, por haber transcurrido más de seis (6) meses sin haberse proferido sentencia de segunda instancia, citando para ello el artículo 121 del Código General del Proceso.

En lo referente a que se declare la pérdida de competencia en aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso, ello es improcedente, atendiendo a que conforme a lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, dicha regulación **no es aplicable en materia laboral**, por cuanto el procedimiento del trabajo y la seguridad social tiene sus propios mecanismos adecuados para

ofrecer a las partes las garantías judiciales debidas y no hay un vacío legal que deba suplirse con tal disposición; al respecto, puede verse **Sentencia SL134-2023, donde se reiteran SL1163-2022 y SL2408-2022**, veamos:

“...la Sala considera que el Tribunal no incurrió en la infracción directa de los arts. 117 y 121 del CGP, comoquiera que estas disposiciones no son aplicables al procedimiento laboral, toda vez que no se dan los supuestos del art. 145 del CPTSS para acudir por analogía a la aplicación de tales preceptos, ya que el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social tiene su propia regulación para garantizar a toda persona su derecho «...a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter» (nl. 1° del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Sin el ánimo de ser exhaustivos en relacionar todos los mecanismos adecuados que prevé el procedimiento del trabajo y seguridad social para brindar las debidas garantías judiciales a las partes, a manera de ejemplo, se rememora que el art. 48 del CPTSS prevé que el juez asumirá la dirección del proceso, adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite. Igualmente, los arts. 30 y 71 ibidem prevé lo que debe hacer el juzgador en caso de que una o ambas partes sean contumaces. Además, está previsto que las actuaciones procesales y la práctica de pruebas en las instancias se llevarán a cabo oralmente, en audiencia pública, so pena de nulidad, art. 42, ibidem.

En fin, el procedimiento del trabajo y seguridad social tiene sus propios mecanismos adecuados para ofrecer a las partes las garantías judiciales debidas, por lo que no se debe acudir a los arts. 117 y 121 del CGP, puesto que no hay un vacío legal que deba suplirse con estas disposiciones, en tanto que el art. 145 del CPTSS solo autoriza acudir al Código General del Proceso a falta de disposiciones en la especialidad. Inclusive, el mismo art. 1 del CGP reconoce que ese código regula la actividad procesal «en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios» y que se puede aplicar a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, «en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes».

Además, la Sala considera que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, puede adoptar distintas medidas que sean adecuadas para brindar a toda persona las garantías judiciales debidas, atendiendo la especialidad de los derechos sustanciales que van a ser objeto de adjudicación por parte de los jueces, por lo que no necesariamente debe hacerlo de igual forma en todos los casos.

En ese orden, si dentro del proceso laboral y de seguridad social no existe una regla similar al art. 121 del CGP, ello no significa necesariamente que hay una laguna normativa que deba suplir el juez, puesto que el legislador tiene

adoptados otros mecanismos que sirven para la misma finalidad, según la especialidad del derecho, como son los previstos en el procedimiento laboral y de la seguridad social.

La pérdida de competencia del juzgador por no dictar la sentencia dentro de un plazo razonable que prevé el art. 121 del CGP no es la única forma de hacer efectivos los principios de celeridad y la garantía del plazo razonable, inclusive, puede llegar a ser contraproducente, como lo previó la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-443-2019, cuando analizó el alcance del artículo 121 del CGP y declaró inexecutable la expresión «de pleno derecho» contenida en el inciso sexto de dicho artículo y la exequibilidad condicionada del resto de este inciso, en el entendido de que «...la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso...».

Respecto a que se fije fecha de audiencia, debe indicarse que el recurso de apelación o el grado jurisdiccional de consulta, según sea el caso, frente a la Sentencia de primera instancia, se resuelve mediante sentencia escrita y no en audiencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022. No obstante lo que se entiende es que se dicte Sentencia en el proceso, sin que el solicitante aduzca siquiera alguna situación especial en la que se encuentre su representada, que diera lugar a estudiar la posibilidad de adelantar el trámite del recurso interpuesto, anotándose que en su gran mayoría los procesos que se tramitan en esta especialidad están relacionados con el derecho a la seguridad social, donde se pretende el reconocimiento de pensiones, como en este caso, teniéndose procesos más antiguos sobre el mismo tema de pensiones para fallar.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL,**

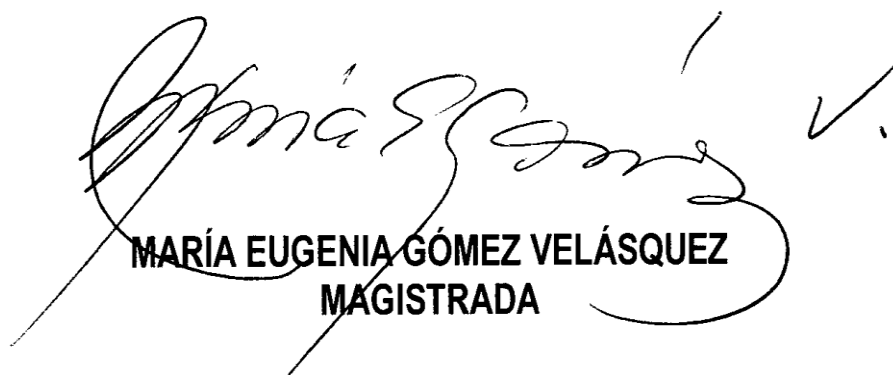
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

Declarar improcedentes las solicitudes de pérdida de competencia y fijación de fecha de audiencia, presentadas por el apoderado de la demandante, según lo explicado en la parte motiva.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** electrónicos.

NOTIFÍQUESE



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
MAGISTRADA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **030 del 21 de febrero de 2024**

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>